

## América Latina

# «entre el dilema del prisionero» y «la tragedia de los comunes»<sup>1</sup>

OSCAR MAÑÁN\*

Ante los múltiples desafíos que enfrenta América Latina —pobreza, corrupción, extractivismo, enajenación de bienes comunes, marginación, entre otros— se examinan las políticas emprendidas durante los últimos años en Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Asimismo, se cuestionan las decisiones tomadas por los gobernantes a la vez que se propone la formación de una comunidad política soberana que persiga el bienestar común por encima del individual.

La fuerza motriz del actual entramado civilizatorio  
entraña una dialéctica profunda entre  
la negación de la vida y la afirmación de la muerte.

Humberto Márquez Covarrubias

Cuando se analiza la situación de América Latina y los cambios políticos en algunos países se alude al fin del ciclo progresista en la región. En efecto, está en ciernes una nueva geopolítica que cuestiona los tímidos avances, en especial aquellos que mejoraron las condiciones de vida de los sectores populares. Muestra de ello es el cambio de gobierno en Argentina, el *impeachment* de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, la inestabilidad política en Venezuela, el intento frustrado de Evo Morales por reelegirse en Bolivia y el impacto de la desace-

leración económica en países que no transitan por situaciones políticas tan acuciantes como Uruguay, pero que limitan los avances institucionales de la década y media de crecimiento.

Dentro de ese debate se puntualizan los cambios geopolíticos que afectan a la región y sus posibles causas. En esa tónica, Brasil es un gigante regional, indispensable para fijar condiciones en cualquier ámbito (sea económico, comercial o político), en tanto que Venezuela y Argentina representan un mensaje popular que ahora se diluye con el regreso de los sectores más conservadores en las posiciones privilegiadas de la política institucional. En este artículo se discuten los puntos de inflexión que

\* Profesor del Centro Regional de Profesores y de la Universidad de la República, Uruguay.

<sup>1</sup> Una versión de este texto fue presentada como conferencia impartida en la Unidad Académica de Economía, Universidad Autónoma de Guerrero, el 17 de mayo de 2016.

llevaron a la caída de gobiernos centrados en los intereses populares. El análisis se emprende desde la comprensión de que es imprescindible efectuar una profunda crítica negadora de lo existente y propulsora de un proyecto político superador para la región.

## Los cambios recientes y una evaluación crítica

América Latina comenzó un conjunto de transformaciones sociopolíticas en los últimos 15 años. Producto de la profunda crisis del neoliberalismo en la región, tanto por las secuelas económicas como por el impacto en los sistemas políticos, se formó un clima crítico que hilvanó un *nuevo relato sobre las formas de hacer política*. Así fue que surgieron nuevos líderes y organizaciones de izquierda que, al reivindicar los intereses de los sectores populares, llegaron al gobierno con la expectativa de realizar transformaciones más o menos radicales.

Varios son los ejemplos: el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013); los gobiernos de la Concertación en Chile (con Ricardo Lagos en 2000 y luego con la primera magistratura de Michelle Bachelet en 2006) que sembraron una esperanza; el triunfo de la coalición en Argentina, que contó con una importante participación de ciertos sectores de izquierda en la articulación de un discurso progresista a fin de que Néstor Kirchner (en 2003) se convirtiera en la mejor opción para enfrentar la crisis económico-política iniciada en 2001; desde 2003, el Partido de los Trabajadores (PT) gobernó Brasil bajo el liderazgo de Luiz Inácio «Lula» Da Silva, un obrero metalúrgico; en 2005, Tabaré Vázquez asumió la presidencia en Uruguay, gracias a la coalición de las izquierdas Frente Amplio y Encuentro Progresista, 20 años después de la recuperación de la democracia; en 2006, Evo Morales se convirtió en el mandatario de Bolivia con el Movimiento al Socialismo (MAS), que busca articular las tradiciones de la izquierda boliviana

y las luchas obreras del país con el rescate de los sentires y las elaboraciones culturales de los pueblos originarios; finalmente, el economista Rafael Correa llegó en enero de 2007 a la presidencia de Ecuador con el apoyo de Alianza País.

Tales circunstancias completarían un mapa progresista con diferentes ideas respecto a la construcción del futuro, pero con un elemento en común: una negación crítica de lo que significó la era neoliberal en la región. Petras se refiere al «bando progresista», donde agrupa diversas experiencias, incluidas las que se esbozan en un discurso antiimperialista como Venezuela, Bolivia y Ecuador, y que a su vez comparten el modelo extractivista neocolonial de Brasil, Argentina, Uruguay y Perú.<sup>2</sup>

Otra forma de caracterización distingue a las experiencias que buscaron deliberadamente instituir un nuevo Estado a partir de un *relato constitucional*, es el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela (Estados instituyentes), y aquellos que simplemente se puntualizan como progresismos. México y Colombia comprenden las experiencias más controversiales, puesto que la inserción internacional y su alineamiento político se someten a la política estadounidense y al interior tienen grandes dificultades para mantener incluso el monopolio legítimo de la violencia, lo que cuestiona su misma esencia (Estados en descomposición).<sup>3</sup>

En las experiencias progresistas se apuntaló un neodesarrollismo, del cual resaltan dos particularidades: la tradicional de «progreso» basado en el crecimiento económico; y cierta «solidaridad con la pobreza».<sup>4</sup> Cabe mencionar

<sup>2</sup> James Petras, «El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista», *Rebelión*, 2012, <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=149207>

<sup>3</sup> Oscar Mañán, «Los Estados posneoliberales en América Latina», ponencia presentada en el Encuentro Pensamiento Crítico, Sujetos Colectivos y Universidad, organizado por el Núcleo-Red Interdisciplinario de la Universidad de la República, Montevideo, el 21 de septiembre de 2011.

<sup>4</sup> P. Vusković, *La pobreza, desafío teórico y estratégico*, México, Instituto de Investigaciones Económicas-Universidad Nacional Autónoma de México, 1993.

que los nuevos desarrollismos no intentaron desafiar las estructuras básicas de la economía y por ende el *statu quo*.

Esta definición laxa de los progresismos sustentados en los imaginarios de desarrollo permite incluir las experiencias de Perú, Chile y Paraguay (bajo el gobierno de Fernando Lugo); y deja de lado el ciclo político (de izquierdas o derechas) o el alineamiento de Chile y Perú a la estrategia comercial del «eje del pacífico» propuesto por Washington, o el caso de Paraguay que desafió la institucionalidad democrática con el juicio político al presidente electo, acción juzgada con dureza en la región.

En concreto, en la dimensión política y de acuerdo con su historia, estos gobiernos rescatan ideas que conformaron el imaginario de izquierda de la región. De modo particular, Venezuela, Ecuador y Bolivia intentaron una síntesis propia (innovadora) de las nociones tradicionales de la izquierda y las tradiciones eurocéntricas (sobre todo las relacionadas con la síntesis política del marxismo occidental, según Anderson). Vale rescatar que tales experiencias intentaron la construcción de un nuevo Estado, partieron de una constitución política que estableció novedosas pautas de vinculación entre el Estado y la sociedad (primero desde el discurso constituyente de Ecuador y Bolivia, con la distinción de ser Estados multinacionales, la reivindicación de sus diferencias y creencias religiosas y el reconocimiento de los derechos a la naturaleza) o con normativas democráticas e institucionales más exigentes (por ejemplo, la Constitución Bolivariana de Venezuela).

Los progresismos no innovaron en la dimensión política, pues en gran medida fueron rehenes de la institucionalidad tradicional. Tampoco apuntalaron cambios institucionales que influyeran en la toma de decisiones fundamentales en el ámbito político, sino que se apropiaron de la representatividad de la democracia electoral y eligieron políticas públicas que permitieron incluir a los sectores sociales marginados en

ciertos servicios (como salud y educación) o en una canasta de bienes de consumo básicos. Más allá de la relevancia de tales políticas y los beneficios concretos en la población, no cambiaron en lo sustancial la estructura de decisiones ni disciplinaron a los mercados.

En las experiencias progresistas y los Estados instituyentes se mantuvieron las modalidades de desarrollo y las formas de inserción internacional. El extractivismo se extendió,<sup>5</sup> basado en una relación depredadora con el medio ambiente, de manera que todos los países fueron cada vez más dependientes de la renta proveniente del ciclo de auge de las *commodities* globales. Tras la caída de los precios internacionales de las *commodities*, la crisis de recaudación fiscal puso en tela de juicio las políticas inclusivas y con ello la alianza con los sectores populares proclives a cambios políticos. Varios aspectos agravantes se aprecian en Venezuela o Argentina, donde las políticas de protección de la economía doméstica, el consumo de masas y la apropiación/utilización de la renta de exportación provocaron una distorsión significativa en los precios relativos y dificultades en las relaciones con los vecinos de la región.

## **Dos preguntas necesarias**

*¿Cuál es la forma o el método de evaluación posible?*

Habitualmente, la izquierda evalúa los logros en comparación con la situación previa. Todo logro por sí mismo siempre es un hecho positivo que involucra enormes esfuerzos y sacrificios que deben valorarse. Pero si no se mide el desempeño propio en función de los cambios necesarios, se pueden eludir responsabilidades

<sup>5</sup> Véase R. Verdum, «El nuevo extractivismo desarrollista en Sudamérica», 2009, <http://www.extractivismo.com/noticias/verdum-extractivismo-desarrollista-sudamerica.html>; E. Gudyas y A. Acosta, «La renovación de la crítica al desarrollo y el Buen Vivir como alternativa», *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 16, núm. 33, 2012.

u obstaculizar la construcción de una estrategia de cambio.<sup>6</sup>

A menudo, los gobiernos denominados de izquierda tienden a compararse con la inacción del periodo neoliberal, en el que la máxima de las políticas económicas era «hagamos poco»; porque el mundo es incierto, los políticos se equivocan y la felicidad es inminente si las fuerzas del mercado operan libres (generan el óptimo social, según el mito neoclásico). Bajo esa lógica autocomplaciente se reproduce una imagen poco congruente con las expectativas de las grandes mayorías que precisaban de transformaciones más radicales. La evaluación corresponde al objetivo de las transformaciones, con ese imaginario o «deber ser» compartido por los movimientos sociales que sustentaron estos gobiernos. En ese sentido, la innovación fue escasa, lo que explica los fracasos y los límites de tales experiencias.

Es pertinente comentar que dichos imaginarios de futuro no se plasmaron en construcciones programáticas elaboradas y, en muchos casos, se asumió un «pragmatismo utilitarista» para retener los gobiernos en desmedro de modificaciones estructurales que cuestionaran la dominación vigente.

*¿Un nuevo gatopardismo?*

Palma sostenía que

en América Latina, de tiempo en tiempo, la oligarquía usa masivamente los cambios políticos y económicos principalmente como forma de justificar en los hechos que ha sido exitosa para hacer de la región el caso más paradigmático en el mundo «de la política y economía del gatopardismo», en el cual «todo debe de cambiar para que todo permanezca como está».<sup>7</sup>

<sup>6</sup> B. Stolorow, «La izquierda latinoamericana. Gobierno, elecciones y proyecto de cambio», en D. Chávez y B. Goldfrank (eds.), *La izquierda en la ciudad. Participación en los gobiernos locales en América Latina*, Barcelona, Icaria/Antrazyt, 2004, p. 213.

<sup>7</sup> P. Palma, «Latin America during the second half of the twentieth century: from the <age of extremes> to the age of <end-of-

Lo anterior sugiere que los cambios realizados por tales gobiernos están siendo desandados rápidamente (Argentina, Brasil) o existe aún incertidumbre (Venezuela, Uruguay). Con seguridad, los países que instituyeron cambios más radicales en la construcción institucional y en la democratización de la toma de decisiones no regresarán con facilidad al pasado. Sin embargo, aquellos cuyas transformaciones estuvieron atadas al ciclo económico de auge, ya fuera bajo la protección de políticas asistencialistas o el fortalecimiento salarial para determinados sectores, verán claramente cuestionados sus avances.

### **Punteo resumen de casuísticas particulares**

*Argentina*

Entre 2001 y 2002, enfrentó una crisis sin precedentes como desenlace del neoliberalismo más disciplinado y feroz entre los conocidos. También se desintegró el sistema político, circunstancia que puso fin a un bipartidismo clásico (radicalismo-justicialismo) que había explicado la vida institucional del siglo XX. La crisis económica estalló luego de un largo atraso cambiario que hizo posible un endeudamiento externo inmanejable. Se reconstruyó la vida institucional mediante una alianza de sectores políticos que se articularon con la estructura remanente de una parte del justicialismo apoyado en los sectores más organizados del peronismo, el movimiento popular que lo acompaña. No obstante, no surgieron nuevos partidos, sino que se fortaleció un movimiento de bases peronistas con improntas nuevas, el cual fue liderado primero por Néstor Kirchner y después por Cristina Fernández en sus dos periodos al frente del Ejecutivo.

Hoy día, el cambio de gobierno se orienta a una rápida transformación con el arribo a la

history> uniformity», in Ha-Joon Chang (comp.), *Rethinking Development Economics*, London, Anthem Press, 2004, p. 148.



Manifestación en Argentina ante la crisis económica.  
Fotografía: Presidencia de la Nación Argentina

primera magistratura de un empresario, Mauricio Macri, identificado con la derecha ideológica dado los primeros cambios impulsados, quien está dispuesto a desmontar con rapidez un conjunto de protecciones a la economía doméstica, cuestión que implica un ajuste esencial en el funcionamiento anterior. La prioridad por la inflación, la liberalización paulatina o rápida de algunos sectores, la inserción internacional y su cercanía con Estados Unidos, la reorientación del eje de crecimiento hacia los mercados mundiales y en especial la vuelta a los mercados de capitales indican cambios no menores en la política del país.

Lo anterior generó de inmediato una reorganización de los trabajadores y la reconciliación entre centrales sindicales antes divididas con el objetivo de enfrentar los impactos del desempleo o las políticas recesivas. A su vez, el país se dividió en dos posturas fuertemente polarizadas: los seguidores de la mandataria saliente y los que apostaron a un cambio de gestión con la actual administración. El nuevo equipo instauró un revanchismo fuerte contra la gestión previa, manifestado en la judicialización de la lucha política que investiga a la expresidenta y sus allegados por diferentes actos sospechosos de corrupción.

Así, la estabilidad política del país está fuertemente cuestionada, la legitimación del ac-

tual gobierno carece de una estructura política que lo apoye y defienda sus estrategias de acusaciones y deslegitimización de sus antecesores. En cambio, la expresidenta Cristina Fernández cuenta con las viejas estructuras del peronismo que le son afines y otras florecientes (como La Cámpora, cuyo líder es su hijo) que cuentan con una enorme convocatoria a nivel de movilización popular.

### *Venezuela*

Constituye una situación excepcional puesto que las dimensiones detonantes de la crisis son varias. A pesar de los notables cambios implementados en los gobiernos de Hugo Chávez, éstos se basaron en la capacidad de liderazgo sin par del presidente, que lo convirtieron en un «liderazgo sobrenatural». Sin embargo, la pobre construcción de institucionalidad política para acompañar dicho liderazgo generó límites importantes en las transformaciones democráticas impulsadas. Luego de la muerte de Chávez, el mandatario Nicolás Maduro tuvo que lidiar con una oposición fortalecida que obtuvo recientemente la mayoría parlamentaria en las últimas elecciones. A falta de un liderazgo comparable al anterior, la actual administración se desgastó en ataques al imperialismo pero con menores probabilidades

de conformar un frente internacional para defenderse de las estrategias imperialistas —tal fue la capacidad de Chávez para alentar una zona soberana de comercio como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), o convocar a sus aliados en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Parte fundamental de los problemas que vive hoy Venezuela es la mala gestión económica, excesivamente dependiente de la renta petrolera, que en momentos de auge no logró una diversificación sectorial acorde con las nuevas ideas que planteaban la necesidad de un socialismo del siglo XXI.<sup>8</sup> Esto suponía pensar en una «sociedad más allá del capital».<sup>9</sup>

<sup>8</sup> H. Dieterich, *El socialismo del siglo XXI*, México, ElectroComp, 2002.

<sup>9</sup> I. Mészáros, *Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición*, Caracas, Vadell, 2001.

Los gobiernos de Hugo Chávez se basaron en su capacidad de liderazgo, que lo convirtieron en un «liderazgo sobrenatural».

Fotografía: Antonio Marín Segovia



La distorsión de precios relativos respecto a la región generó «mercados negros» o «negocios subterráneos» a los que la economía no pudo resistir. En particular, la tradicional impronta de mantener la gasolina extremadamente barata o el subsidio otorgado a productos de la canasta básica, creó un comercio clandestino hacia Brasil o Colombia y provocó el desabasto interno y el mal humor de la población urbana. Sutherland apunta las aristas de la tremenda crisis:

La situación económica del país es extremadamente grave. La inflación más alta del mundo (140 por ciento [i]), déficit fiscal de dos dígitos (por quinto año consecutivo), caída de 75 por ciento de los precios del petróleo, el riesgo país a la inversión internacional más alto del globo (JP EM-BI+ 4145 puntos [ii]), la estrepitosa caída del PIB (-7,1 por ciento al tercer trimestre de 2015[iii]), la cantidad de reservas internacionales más baja del decenio y una tremebunda escasez de toda clase de bienes y servicios. A ello se le suma la fuga de capitales más elevada del planeta [iv]. Ante ese deslucido panorama se erige la certeza de que la situación puede ser mucho más grave, pero que en 2016 será el desenlace.<sup>10</sup>

Sin duda, la gestión de la política económica ha sido deficitaria y la emisión de dinero, en un intento por disimular otros problemas como la inflación, la ruptura de todas las alianzas que mantuvieron cierta estabilidad política y las dificultades más acuciantes que vive la población no auguran un futuro prometedor para la revolución bolivariana. Lo anterior hace pensar que la derecha y el revanchismo clásico sustituirán los más de tres lustros de esperanza libertaria del chavismo bolivariano.

<sup>10</sup> M. Sutherland, «2016: La peor de las crisis económicas, causas, medidas y crónica de una ruina anunciada», Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO-ALEM), 2016, p. 1. <https://alemciso.wordpress.com/>

## Brasil

Es el último de los países que entró en una premeditada crisis política y merece una explicación más amplia. Al igual que en gran parte de los países del sur de América, Brasil sentiría la caída del súper ciclo de los *commodities* y la crisis económica, lo cual desestabilizó al pacto gobernante. El PT entraba en su cuarto periodo consecutivo en la presidencia, tras dos administraciones de «Lula» Da Silva, entre 2003-2010, uno más de Dilma Rousseff, quien se encontraba en su segundo periodo al frente del gobierno.

El arribo del PT al gobierno ocurrió después de una gran transformación al interior del partido, cuando había moderado sus resistencias al orden vigente y ya no era típicamente un partido de clase, sino policlasista y respetuoso del lugar del país en la «era de la financiarización».<sup>11</sup> En su primera administración, «Lula» no realizó cambios sustanciales en el enfoque «social-liberal» o «neodesarrollista», como lo llamaba el PT, mientras que en el segundo se generalizaron políticas de asistencia social focalizadas (aunque extendidas a todo el país) para enfrentar el impacto de la crisis en los sectores populares. Con ello logró un mejoramiento del salario mínimo, en comparación con los gobiernos de Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso. En opinión de Antunes:

*El gobierno del PT de Lula ejecutó con rara competencia una política de concertación excepcional, que lo asemejó a un verdadero semi Bonaparte (en el sentido de conciliación, no de dictatorial): concedió enormes beneficios a las distintas fracciones del capital, especialmente al financiero y al industrial (es sabido que incluso hay una fuerte simbiosis entre estas dos fracciones del capital) y al agronegocio. Y en el extremo opuesto de la*

<sup>11</sup> R. Antunes, «Brasil: el colapso del Gobierno Dilma y el PT», *Herramienta*, núm. 57, 2015.

*pirámide social, se aplicó una política social asistencialista buscando minimizar la miseria brasileña (énfasis del autor).*<sup>12</sup>

La victoria de Dilma sería producto de la imposición de un «Lula» fortalecido que finalizaba su mandato con más de 80 por ciento de aprobación en las encuestas, cuestión que ocasionaría malestar en las bases políticas dado que otros candidatos con mayor dominio de la política y autonomía del «lulismo» se avizoraban posibles (por ejemplo, Tarso Genro). El primer gobierno fue entonces un traspaso natural de la impronta de «Lula».

Dilma mantuvo en esencia el recetario del segundo gobierno de «Lula»: crecimiento económico con énfasis en la ampliación del mercado interno; incentivos a la producción de *commodities* para la exportación (que beneficiaron especialmente al capital vinculado con el agronegocio); reducción de impuestos que favoreció a los grandes capitales (industria, construcción civil, etcétera); conservación de una política financiera protectora —durante gran parte de su gobierno— de intereses altos, lo que pretendía garantizar el apoyo del sistema financiero.<sup>13</sup>

La crisis que afecta al gobierno se acompaña de una crisis en el centro capitalista expandida en Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), que dividió algunos apoyos de los sectores financieros que habían integrado de manera estratégica los gobiernos del PT. En adición, en junio de 2013 ocurrió el estallido del Movimiento Pase Libre ante reivindicaciones que denunciaban la privatización del transporte público y su precarización, los déficits en salud y el abandono de la educación, en resumen se le llamaba «la mercantilización de la *res publica*». Asimismo, se avanzaba en la denuncia de supuestos desvíos de dinero público para apoyar la Copa de las Confederaciones,

<sup>12</sup> *Idem.*

<sup>13</sup> *Idem.*

Barack Obama y Dilma Rousseff durante una visita de Estado del mandatario estadounidense a Brasil en 2011. Fotografía: Roberto Stuckert Filho



la cual tuvo lugar en el país en un entramado de intereses entre la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el gobierno y empresas transnacionales para la construcción de estadios e infraestructura de accesos para un deporte mercantilizado por completo. También dichas movilizaciones tuvieron como caja de resonancia otras que desde 2008 se sucedían a escala mundial (#YoSoy132 de México, los indignados, etcétera). Confluyeron en estas reivindicaciones desde sectores medios politizados, algunos sectores conservadores de las clases medias urbanas y parte de la izquierda más crítica al PT, con obreros y trabajadores usuarios de los servicios básicos más o menos desorganizados; cuestión que desmiente las construcciones ideológicas del «país de clases medias».

En el segundo periodo, Dilma habría conformado el gobierno en alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más importante de la coalición (aunque también con el PP, el PR y el PSD). Aquí ya se procesaría un cambio económico significativo que, a pesar de la campaña electoral, tendría como estandarte al «ajuste fiscal», la reducción de conquistas como el seguro de desempleo, el aumento de las tasas de interés bancarias y el

aumento del superávit fiscal primario con la ampliación de privatizaciones (aeropuertos, puertos, rutas).

A su vez, la operación judicial conocida como *Lava Jato* pone al rojo vivo el tema de la corrupción en Brasil —por ejemplo, Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS)—; lo que había sido conocido y soportado en los gobiernos anteriores de Collor de Mello o Cardoso tiene un efecto depredador en un gobierno que venía marcado a fuego por la ética de la izquierda. De ese modo, Dilma fue involucrada tanto por los hechos de corrupción de sus aliados políticos (fundamentalmente el PMDB) y el PT (Jose Dirceu y Joao Vaccari, entre otros). En consecuencia, la derecha implementó los ataques contra la presidencia (en un contexto de disputa ante la caída de las ganancias se intentó que los trabajadores asumieran los costos de la crisis), a lo cual se unieron los grupos de izquierda no oficial, como el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) y el Partido Comunista Brasileño (PCB), muy críticos con el gobierno y vastos sectores desencantados.

El golpe parlamentario, cuestionado con severidad fuera de Brasil, es una mera forma en la que opera la implosión del partido

de gobierno y una herramienta propuesta por los parlamentarios liderados por el PMDB, tal vez para diluir también sus comprometidas acciones.

### *Bolivia y Ecuador (los países instituyentes)*

Aunque son un ejemplo de ejercicio de soberanía, en varios aspectos no lograron construir circuitos de comercio o procesos de integración sostenible, más allá de acuerdos ventajosos y apoyos solidarios recíprocos. No obstante, sobresalen respecto a las experiencias progresistas por varios aspectos: una crítica contundente desde sus formas de vida y valores culturales a los imaginarios etnocéntricos del desarrollo, la soberanía en la toma de decisiones, cierto control nacional del proceso productivo y la propuesta de nuevas formas de vida basadas en las tradiciones indígenas, aunque se presentarían frustraciones en el camino.

En el caso de la constitución ecuatoriana, «el régimen de Buen Vivir» aparece como una cuestión de derechos al mismo nivel jerárquico que otros como la alimentación, la vivienda, la salud, el ambiente sano, el agua y la educación. Entonces, este régimen se sitúa al mismo nivel que el régimen de desarrollo: «El conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del Buen Vivir, del *sumak kawsay*».<sup>14</sup> De lo que surge la estrecha relación entre el Buen Vivir y la modalidad de desarrollo:

Buen Vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Artículo 275, citado por E. Gudynas y A. Acosta, *op. cit.*

<sup>15</sup> *Idem.*

Complementariamente, en Bolivia las concepciones del «Buen Vivir» se vinculan a las tradiciones culturales de los diferentes pueblos pero buscan una articulación con las funciones del Estado:

Asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: *ama qhilla, ama llulla, ama suwa* (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), *suma qamaña* (vivir bien), *ñandereko* (vida armoniosa), *teko kavi* (vida buena), *ivi maraei* (tierra sin mal) y *qhapaj ñan* (camino o vida noble).

Tales principios éticos se asocian con otros de igual jerarquía: «Unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, etcétera».<sup>16</sup>

Pese a las definiciones que por primera vez reconocen las injusticias de los Estados pretendidamente nacionales, los avances de los procesos constituyentes andinos son indiscutibles en cuanto a la crítica de las visiones eurocéntricas del desarrollo, puesto que se enfocaron en la plurinacionalidad, la relación con la naturaleza y el rescate de una forma de vivir diferente a los parámetros del «patrón de poder en crisis» que los mantenía en una «subsunción epistémica/teórica/histórica/estética/ética/política».<sup>17</sup> Los pueblos históricamente subordinados aparecen como una luz inquisidora y de esperanza ante un porvenir que presentaba al capitalismo como la única opción.

Lo cierto es que ese proceso está plagado de dificultades, conflictos y contradicciones no resueltos; su éxito radica en una articulación de espacios donde el poder se ejerza de otra manera, con el respeto a las diversas culturas, sin monopolizar los territorios, al fijar criterios de convivencia con las diferentes formas productivas,

<sup>16</sup> *Idem.*

<sup>17</sup> L. Tapia, «Los pueblos de tierras bajas como minoría plural consistente», *Contrapunto*, núm. 2, 2013, pp. 95-110.

con la defensa de las lenguas autóctonas que representan autonomías de pensar, hacer y darse gobierno, sin olvidar el entorno ambiental y su reproducción en el tiempo.

Las dificultades se resuelven en la medida en que el primer paso instituyente se articule con otros que refunden el Estado (sobre nuevas bases); pero si las demandas propias de los pueblos «indigenizados bajo la dominación colonial» se convierten en una reconstitución interna del país y el Estado las asume, éstas se convertirán en reforma del Estado existente.<sup>18</sup>

En el ejemplo de Bolivia, los pueblos de tierras bajas comenzaron la movilización en los 1980 por la «plurinacionalidad» en varias dimensiones: *a)* diferentes colectividades que son parte de la misma cultura, *b)* unificación de varios pueblos que habitan una región en asambleas o centrales indígenas pluriétnicas, *c)* unificación de organizaciones en la Confederación Indígena de Pueblos del Oriente de Bolivia.<sup>19</sup> Sin embargo, estos pueblos son tratados como «minorías plurales consistentes» y de alguna manera se ejerce el poder con base en divisiones oriente-occidente, campo-ciudad, clases sociales, mestizos indígenas-blancos mestizos, campesinos-indígenas, colonizadores-campesinos indígenas y entre los indígenas divididos en 36 grupos étnicos o nacionalidades; ello le permite al gobierno tratarlos a todos como minorías, que desde una acendrada visión electoralista carecen por separado de valor. Dichas agrupaciones merecen el mayor respeto por un Estado plurinacional, pero si el criterio es someterlos como minorías (al igual que lo hacen en la ciudad), lo mejor es tratarlos como fragmentos

tribales, que es la apariencia que nos presenta el MAS; mil fracciones que se pelean por candidaturas y prebendas.<sup>20</sup>

El desarrollo capitalista y su extensión enfrenta a los gobiernos que toman una lógica de ciclo político, incluso cuando están convencidos de una transformación de largo aliento en el sentido de la narración constitucional, con los pueblos que resisten en sus modos productivos, culturas y formas de gobierno. Muestra de lo anterior son los pozos petroleros en las zonas del Chaco boliviano. Ante el enfrentamiento, los gobiernos optan por una lógica etapista de desarrollo (Rostow y compañía) al seguir con el extractivismo y al subsumir ahora como minorías rebeldes bajo la égida de un Estado nación opuesto a la plurinacionalidad y la pluriculturalidad declarada.

### Uruguay

La experiencia uruguaya se cataloga aquí como *gatopardismo* y desencanto.<sup>21</sup> También la llegada al gobierno de una coalición de izquierdas de gran trayectoria en el intento de construir un proyecto popular suponía enormes expectativas. En cambio, la izquierda que empezó a gobernar en 2005 venía haciendo un proceso de «*aggiornamento* ideológico» desde la mitad de los 1990 y había sido permeada por las ideas liberales popularizadas en esa época. Entonces, ya no era la izquierda de la crítica implacable al neoliberalismo, ahora rescataba sus avances, en especial la vuelta al crecimiento, los equilibrios fiscales, el control de la inflación y la apertura a la inversión extranjera. A su vez, priorizó la deuda externa y adelantó pagos para no soportar «la condicionalidad estructural» de los organismos crediticios (si bien permitió la vigilancia de las instituciones de Bretton Woods: FMI, BM, OMC) y trabajó para los indicadores

<sup>18</sup> Véase las investigaciones de A. Acosta, «El retorno del Estado. Primeros pasos posneoliberales mas no poscapitalistas», *Tendencia*, núm. 13, abril-mayo 2012; J. Lora, «En Bolivia ganó la democracia, perdió la derecha y el MAS», 2010, <http://www.rcci.net/globalización>; L. Tapia, «Sociedad abigarrada. Repensando la democracia multicultural en Bolivia», entrevista de M. Díaz, 2012, <http://relacso.flacso.edu.mx>; L. Tapia, «Los pueblos de tierras bajas...»

<sup>19</sup> L. Tapia, «Los pueblos de tierras bajas...», p. 102.

<sup>20</sup> J. Lora, *op. cit.*, p. 2.

<sup>21</sup> Oscar Mañán, «Uruguay y la era <progresista>: gatopardismo y desencanto», *Comercio Exterior*, vol. 63, 2013, p. 6.

Si las demandas propias de los pueblos «indigenizados bajo la dominación colonial» se convierten en una reconstitución interna del país y el Estado las asume, éstas se convertirán en reforma del Estado existente.

---

internacionales de «buen gobierno» antes que la deuda social, la inversión pública o la diversificación sectorial de la economía.

Los logros de la primera década de tales gobiernos comparten con las experiencias aquí reseñadas el auge de los precios de las materias primas, a lo que se añaden algunos cambios institucionales que resolvieron los problemas del sistema de salud (aunque con una base mercantil y el financiamiento dominante de los trabajadores), la vuelta a la negociación colectiva en consejos de salarios, el fortalecimiento de los salarios más deprimidos (trabajadores de servicios domésticos, peones rurales, entre otros) y una política pública focalizada hacia los sectores de menor ingreso (pobres e indigentes).

No obstante, la desaceleración económica del pasado año y las expectativas poco halagüeñas ante la crisis regional, en específico la caída de la economía brasileña en la que se ubica el segundo destino de las exportaciones (después de China), recuerda las viejas políticas conservadoras del pasado. El presupuesto 2005-2010 rescata un ajuste fiscal por varias vías, el recorte de inversiones públicas, además de que las pautas salariales disminuidas para discutir aumentos revelan una pérdida salarial en el periodo, incluso una modalidad novedosa en la técnica presupuestaria que implicó el compromiso del gasto a sólo dos años.

Por último, quizá lo más preocupante porque augura un final parecido a otras experiencias vecinas es que se constatan retrocesos para el ejercicio de derechos de protesta por demás legítimos, controversias públicas inducidas por declaraciones de connotados repre-

sentantes del poder Ejecutivo en la perspectiva de deslegitimar derechos como el de huelga, o por extensión las ocupaciones de lugares de trabajo o estudio, incluso el de solidaridad de unos trabajadores con otros. El recurrir a la extorsión para imponer la razón o preferir medidas autoritarias antes que el diálogo fraternal, o la represión para desalentar, judicializar o criminalizar medidas de protesta, son el saldo más negro de esta nueva política innovadora en lo presupuestal.<sup>22</sup>

### **Reflexión final entre «el dilema del prisionero» y «la tragedia de los comunes»**

En la teoría de los juegos se plantea para el análisis estratégico «un modelo de conflictos muy frecuentes en la sociedad» conocido como «dilema del prisionero» (*prisoner's dilemma*). Se refiere a dos individuos que son apresados, pero el acusador no tiene todos los elementos de prueba. Entonces, se propone una oferta interesante a cada uno de los prisioneros por separado (que están incomunicados) para reducir su pena si brindan información que incrimine al otro compañero. Cada prisionero tendrá dilemas que resolver: mantener una conducta leal con el compañero suponiendo que el otro tendrá las mismas consideraciones, o traicionarlo para beneficiarse. Si acusa al compañero, su beneficio será óptimo aunque cargará la traición en su conciencia;

<sup>22</sup> Oscar Mañán, «Inestabilidad económica real e inducida, escollo en el ejercicio de derechos», *Derechos Humanos en Uruguay. Informe 2015*, Montevideo, Serpaj, 2015, pp. 299-308.

mientras que si se declara cómplice, las penas serán iguales para ambos pero mayores que si la estrategia es la traición.<sup>23</sup>

El ejemplo esclarece buena parte de los dilemas de los gobernantes recientes en América Latina y su toma de decisiones al momento de diseñar un programa de gobierno que beneficie a las mayorías populares. Muchos gobernantes sostienen que llegaron al gobierno pero no «al poder», por lo tanto deben sujetarse a las reglas del juego institucional existente en sus sociedades y respetar los equilibrios de clase que el pasado les legó. El dilema apunta al mantenimiento de los cargos y sus sucesivas reelecciones, ya que se supone que es preferible dejar las transformaciones para más tarde so pena de alentar un conflicto irresoluble. En palabras de Dussel,<sup>24</sup> al poder no se llega (como si fuera un altar), tampoco se toma (como si fuera una cosa), sino que se ejerce de forma delegada por la soberanía que radica en la comunidad política y que en un momento determinado lo permite.

En efecto: *a*) el poder radica en la comunidad política, quien faculta su ejercicio a cierto cuerpo burocrático (instituciones y representantes) que «manda» (o gobierna) en representación del soberano; *b*) el ejercicio positivo del poder que fortalece la comunidad política; *c*) si el ejercicio apegado a esa representación sería un gobierno que «manda obedeciendo» (como plantea el zapatismo); *d*) cuando dicho ejercicio se fetichiza las instituciones o representantes se alejan de la comunidad soberana y creen que la soberanía radica en ellos; *e*) el poder se ejerce como dominación en detrimento de las instituciones y representantes («los que mandan mandando»). Los primeros tres casos regeneran el poder y la soberanía de la comunidad política, los restantes serían «poderes corruptos».

<sup>23</sup> R.M. Axelrod, *The Evolution of Cooperation*, New York, BASIC Books, 1984.

<sup>24</sup> E. Dussel, *20 Tesis de política*, México, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe/Siglo XXI Editores, 2006.

Así, el razonamiento más sensato de los gobernantes que no se encuentran articulados por institucionalidades políticas de control o vigilantes, toman decisiones racionales basados en su estrategia individual de mantener diversas prerrogativas que disfrutaban. Por ende, siguiendo el dilema anterior, la estrategia más óptima es la traición (dejan para otras ocasiones aquellos intereses cuyo beneficio se encuentre en conflicto con los sectores dominantes y con mayor poder de presión). Esta es la forma más común de lo que Dussel nombra como «fetichismo del poder»,<sup>25</sup> cuando el gobernante toma decisiones y se aleja de la soberanía que «delegadamente» se lo otorga. Además, el «pueblo soberano» en las democracias representativas latinoamericanas se distancia de una participación real en las cuestiones más caras de su vida material, por lo que queda relegado a ciertos aspectos formales (votaciones, consultas, movilizaciones por reivindicaciones económicas menores, etcétera). Es el caso más típico latinoamericano de los progresismos que no enfrentan el *statu quo* dominante; al contrario, en ocasiones pactan o ejercen el poder apoyados en los poderes fácticos que los grupos dominantes mantienen y no en la comunidad política que les otorgó el mandato de defender sus intereses largamente relegados. Es posible suponer que no existe mala fe consciente y que en su mayoría dichos representantes razonan en los parámetros del «dilema del prisionero», por lo que soslayan las necesidades de la comunidad soberana para tiempos posteriores.

Asimismo, la «tragedia de los comunes» manifiesta otro aspecto de las decisiones de cooperación y utilidad con la que los seres humanos se enfrentan a diario. Se refiere al conflicto entre la racionalidad individual y la racionalidad social, que se ejemplifica de la siguiente manera: en una comunidad pastoril la propiedad de los animales es privada y las tierras donde se

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 6.



En las experiencias rupturistas que rescatan las prácticas ancestrales de sus pueblos dentro de una teoría transformadora en Bolivia y Ecuador, no hay avances sustanciales para enfrentar los desafíos en un programa concreto. Fotografía: Fernanda LeMarie

alimentan son públicas; la racionalidad del beneficio individual apunta a que el campesino que pueda agregar más cabezas de animales generará beneficios porque las tierras son públicas. Aunque esa racionalidad podría ser considerada por todos (ya que maximiza el beneficio de cada uno), en el límite generaría un problema al conjunto de la comunidad debido a que las tierras se verían sobreutilizadas y los animales no tendrían suficiente comida. De acuerdo con Hardin:

La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos.<sup>26</sup>

Tal tragedia conduce a pensar en muchas de las estrategias extractivistas de la región, incluso en aquellas que desde sus constituciones se proponen respetar a la madre naturaleza o la madre tierra y sus culturas ancestrales que tienen una reproducción ecológica con el ambiente. Los países de América del Sur aquí analizados optaron por una modalidad de de-

sarrollo extractivista a cambio de las supuestas bondades de la inversión extranjera directa (IED) que podría eventualmente mejorar los déficits fiscales y suavizar un ciclo económico en declive.

Se sigue repitiendo el mito de la falta de ahorro interno, mientras que no se hacen provisiones para la salida de capitales; en numerosos casos los sistemas tributarios son especialmente bondadosos con la IED y por demás estrictos con sus *gravámenes al consumo* (que afectan más a los sectores sumergidos). La canción de Gabino Palomares «La maldición de la Malinche» evidencia hoy al dios mercado y a la inversión extranjera:

Se oyó la voz del monarca  
de que el dios había llegado.  
Y les abrimos la puerta  
por temor a lo ignorado...  
Se nos quedó el maleficio  
de brindar al extranjero  
nuestra fe, nuestra cultura,  
nuestro pan, nuestro dinero.  
Y les seguimos cambiando  
oro por cuentas de vidrio  
y damos nuestras riquezas  
por sus espejos con brillo...  
Oh, maldición de Malinche,

<sup>26</sup> G. Hardin, «The Tragedy of Commons», *Science*, vol. 162, 1968, p. 1245, <http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetitas/231/hardin.html>

enfermedad del presente,  
¿cuándo dejarás mi tierra..?  
¿Cuándo harás libre a mi gente?

A su vez, la enajenación de vastos territorios a la minería de gran porte, a los monocultivos transgénicos, la explotación del petróleo (incluso con técnicas muy agresivas como el *fracking*), son estrategias que llevan inexorablemente a la ruina de los recursos comunes y al empobrecimiento del planeta. No es factible aún sostener una concepción de bienes comunes con una visión planetaria, cuando sí se rescata esa visión al hablar del libre tránsito de capitales o libre comercio, pero se resiste la idea de defender al planeta con un criterio intergeneracional o permitir la libre movilidad de los seres humanos.

Como corolario, la región sufre una modalidad desarrollista caracterizada por un extractivismo orientado a la globalización que es especialmente depredador de los bienes comunes. Incluso en las experiencias rupturistas en cuanto a rescatar las prácticas ancestrales de sus pueblos dentro de una teoría transformadora (Bolivia y Ecuador), no hay avances sustanciales en un programa concreto para enfrentar los desafíos. En aquellos países donde se aceptaron los equilibrios de clase existentes

sin el propósito de promover cambios estructurales para un funcionamiento diferente de la economía, los beneficios se podrían evaporar rápidamente dada la crisis regional (Argentina, Brasil, Uruguay, en los dos primeros ya existen indicios claros). Donde hay un conjunto de reglas del juego instituidas, aunque sólo a nivel del «relato constitucional», dicha institucionalidad comprende una coraza que puede resistir una rápida vuelta al pasado (Bolivia, Ecuador y, paradójicamente, Venezuela).

El desafío consiste en superar los dilemas planteados, construir una comunidad política soberana capaz de poner la racionalidad social por encima de la individual para lidiar con la tragedia de los comunes y vencer el dilema del prisionero con la debida dosis de solidaridad/condescendencia con los «jodidos» del sistema social. Un «hombre nuevo» tendrá que ser parido de las entrañas de la descolonización epistemológica de los mitos transmodernos ya en curso, heredero de fracasos y luchas previas pero dispuesto a valorar el trabajo en su sentido de «productor de vida» y no únicamente en su aspecto instrumental de productor «de medios de vida» (cuya expresión dominante es la acumulación capitalista sustentada en la reproducción incesante de las fuerzas productivas en forma de mercancías).

---

«La ruina es el destino hacia el cual corren todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos».

GARRETT HARDIN

